

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Vobis etiam merito accepta referimus, qui tam strenue religionis, et
justitiae partes tuendas suscepistis.....

DIARIO CATÓLICO, APOSTÓLICO, ROMANO.

Deumque, cuius causam agitis, rogamus ut vos in proposito confirmet.—
Pío IX, al director y redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Madrid 12 rs. al mes.—En Provincias 17 rs. al mes, y 50 por trimestre en casa de los comisionados, y 15 rs. al mes y 42 el trimestre en la administración.—En el extranjero: 70 En Ultramar: 90 reas.—rs. trimestre.—les trimestre.—La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRICION.—Madrid: En la administración, calle de Pelayo, números 38 y 40, cuarto principal de la derecha.—Provincias: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.—París: Agencia franco española de D. C. A. Saavedra, 55, rue Taibout.—Manila: D. Francisco Zudaire, Presbítero.—No se devuelve ningún manuscrito.

CORTES CONSTITUYENTES.

PRESIDENCIA DEL SR. VICEPRESIDENTE D. MANUEL CANTERO.

Extracto de la sesión celebrada el día 10 de Junio de 1869.

Abierta a las tres y cuarto y leída el acta de la anterior por el señor secretario Carratalá, fué aprobada.

Se dió primera lectura de varias enmiendas al proyecto relativo a dar fuerza de ley a los decretos del Gobierno provisional, acordándose que pasaran a la comisión respectiva.

Se dió cuenta de la siguiente proposición de ley autorizada por las secciones:

«Artículo 1.º Los presupuestos de gastos del año económico de 1869 a 1870 no deberán exceder de 2.000 millones.

Art. 2.º Si después de castigados convenientemente y según las necesidades actuales excedieran todavía de la cifra señalada, se faculta al Gobierno para vender bienes en cantidad igual de los que constituirían el patrimonio reservado de la Corona.

Art. 3.º Si en los años sucesivos, y partiendo siempre de la base de 2.000 millones, no fuera posible dejar nivelado el presupuesto, se autoriza igualmente al Gobierno para vender los mencionados bienes que resten, hasta invertir completamente su producto en dichos fines.

Madrid, 2 de Mayo de 1869.—Francisco Pascual Reig.—Joaquín Sancho.—Francisco Javier Moya.—Manuel Pascual.—Enrique Nieulant.—Vicente Paset.—Luis de Molini.

El Sr. REIG: No trató de molestar mucho tiempo la atención de las Cortes al apoyar la proposición de que se acabó de dar lectura.

Sabido es que el pueblo español saludó con entusiasmo la revolución, porque creyó ver en ella garantido el orden, realizadas las economías y afianzada la libertad, porque de lo esto necesitaba el país, no pudiendo quedar satisfecho con cualquier cosa que se le faltan las demás. Hasta ahora solo ha visto algunas circulares y varios artículos escritos en la Constitución, que si bien es una obra grande, no es, sin embargo, todo lo que necesita, puesto que uno de los objetos que merecen también nuestra atención preferente son las economías.

En las oficinas del Estado sobran la mitad de los empleados, que es preciso se acostumbren a trabajar ocho ó diez horas diarias, con lo cual se podrán aliviar las cargas del Estado, quedando atendido perfectamente el servicio. Y aquí debo manifestar que no estoy conforme con las ideas del señor ministro de la Gobernación, que nos decía hace algunos días que en las oficinas sobra personal, pero que no está bien retribuido, y por consiguiente, no cubra gran economía en este punto, pues la que pudiera resultar de disminuirlo quedaría anulada con la mayor retribución que debía darse. Yo creo que sobra mucho personal, mas no que se le pague poco; si así fuera, no se habría desarrollado tanto la empleomanía.

Desde el 29 de Septiembre no debían haberse declarado las cesantías y jubilaciones en la forma que se ha hecho; y aun cuando no soy tan radical que no respete la legislación que puede regir en épocas determinadas, yo juzgo que con 10 ó 15,000 reales cuando más puede pasar muy bien un cesante ó jubilado.

Es, pues, indispensable disminuir los gastos y sacar a la venta los inmensos bienes que el Estado tiene y que no hay razón alguna para que los retenga en su poder, sin excluir esos montes que tanto gasto causan y para cuya conservación necesita triplicar el personal dedicado a su custodia.

El pueblo no debe pagar un presupuesto que pase de 2.000 millones; y de todos modos, esos bienes pueden servir para la nivelación.

El monarca que venga, es preciso que sepa que somos pobres, y que se contente con una asignación regular, proporcionada a lo que nuestro estado exige; y si quiere tener algunas posesiones, que las adquiere en su necesidad de que nosotros se las vayamos a dar.

El señor ministro de HACIENDA: El discurso del Sr. Reig está basado en el más acendrado patriotismo; y efectivamente, yo creo que la gran dificultad está en la cuestión rentística, pues la política está dominada, puesto que ya han pasado las dos fases más difíciles, quedando solo por resolver la tercera, que ya no lo es tanto.

S. S. habrá visto los presupuestos, observando que hay una cantidad de 1,869 millones de gastos irreducibles, pues no creo que quiera S. S. se fante a los compromisos contraídos con los acreedores, que se destruyan los faros, las carreteras y otras muchas cosas preciosas, sin las que no podemos pasar.

S. S. desea que se llene el vacío con los bienes de la corona; pero habrá visto que los vendibles solo ascienden a 600 millones, y por lo tanto no alcanzan a cubrir ni aun el déficit de este año. Yo creo que lo que hace falta es tener ánimo para ver el peligro y arrostrarlo.

Ha hablado S. S. de los empleados, y debe saber que estos no cuestan más que 304 millones, y que con el sueldo que cobran, en general, no pueden vivir tan bien como el que se dedique a una profesión; pudiendo yo decir que me arruina el ser ministro de Hacienda, porque me traía mas cuenta el ejercicio de mi profesión. Podrá decirse que no trabajaban tanto en la administración anterior; pero hoy día no sucede eso: se han disminuido muchos empleados, quedando solo los indispensables; que desempeñan cumplidamente su cometido.

Por último, creo que S. S. debería retirar esta proposición; pero en el caso de que así no lo haga y las Cortes quieran tomarla en consideración, debe pasar en mi concepto a la comisión de presupuestos, que podrá estudiarla y ver lo que puede hacerse.

El Sr. REIG: No he dicho yo que aumenten los guardas de montes; lo que he indicado es que se vendan los montes, porque si se empeña el Estado en conservarlos, necesita triplicar el número de los encargados de su custodia.

Ha hablado S. S. de bienes vendibles, lo que supone que hay algunos no vendibles, y yo opino que están en el primer caso, pues el monarca solo necesita que se le dé una asignación decente.

El señor ministro de HACIENDA: Dice S. S. que al hablar yo de bienes vendibles indicaba que los hay no vendibles, y en efecto es así. Tenemos el palacio de Madrid en la plazuela de Oriente, que vale muchos millones, y que no riqueza como la que lo saqueamos a la venta, y hay riquezas como las del Museo del Prado, que hasta son reproductivas, porque entran multitud de extranjeros a ad-

mirarlas, y es cuestión de honra y de decoro nacional el conservarlas.

Leída nuevamente la proposición, y previa la oportuna pregunta, fué tomada en consideración, acordándose pasara a la comisión de presupuestos.

Se dió lectura de la proposición siguiente, autorizada por las secciones:

«Artículo 4.º Se restablece desde esta fecha en toda su fuerza y vigor la ley de 19 de Agosto de 1841, por la que se desamortizaban los bienes de las capellanías colativas, familiares ó de sangre.

Art. 2.º Quedan derogadas la ley-convenio de capellanías colativas de sangre de 24 de Junio de 1867 y cualquiera otra disposición contraria al espíritu desamortizador de la citada ley de 19 de Agosto de 1841.

Palacio de las Cortes, 31 de Mayo de 1869.—Justo T. Delgado.—Pedro Mateo Sagasta.—Demetrio Macia Castello.—Lipriano Sagundo Montesiño.—L. Rujo Arias.—Luis Dieguez Amoreiro.—Juan Tutau.

El Sr. DELGADO: Señores diputados, la proposición que tengo el honor de apoyar es de suma importancia, si bien yo me propongo exponer solo algunas brevísimas consideraciones sobre ella.

La ley de 1841, que prevenía la desamortización de los bienes de que se trata, obedecía a un gran principio de justicia y de conveniencia social, concluyendo con una institución perjudicialísima, aun para la misma Iglesia, puesto que por medio de ella entraban a formar parte del Clero personas que ni por su carácter, ni por su vocación, ni por sus conocimientos debían pertenecer a él.

Los reaccionarios, señores, marchan atrevidamente quitando todos los obstáculos que a su paso se oponen, y los partidos liberales, por el contrario, tienen siempre una porción de miramientos que producen los peores resultados.

Leída de nuevo la proposición, y previa la pregunta oportuna, fué tomada en consideración, acordándose pasara a las secciones para los efectos del reglamento.

Se leyó la siguiente proposición, autorizada por las secciones:

«Tenemos la honra de rogar a las Cortes que se dignen aprobar la siguiente

Proposición.

Las Cortes Constituyentes declaran dignos de ocupar un lugar en el panteón nacional que se mandó establecer por la ley de 6 de Noviembre de 1837, los restos del poeta Juan de Mena, del Gran Capitán, de Garcioloso de la Vega, de Ambrosio Morales, de Alfonso de Ercilla, de Lanza, de Quevedo, de Calderón de la Barca, del marqués de la Ensenada, de los célebres arquitectos Ventura Rodríguez y Juan Villanueva, y del almirante Gravina.

Palacio de las Cortes 40 de Junio de 1869.—Carlos Olozaga.—Estanislao Figueras.—Carlos Godínez de Paz.—Cristóbal Martín de Herrera.—Cipriano Sagundo Montesino.—Victor Balaguer.—Eduardo Benot.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): El señor Olozaga tiene la palabra para apoyar su proposición.

El Sr. OLOZAGA: Treinta y dos años hace, señores diputados, que unas Cortes Constituyentes decretaron la creación de un panteón nacional en San Isidro para honrar la memoria de los varones preclaros de España. Varias han sido las gestiones practicadas para llevar a cabo este pensamiento; mas todas han sido inútiles.

El Poder ejecutivo ha procurado traer todos los restos que sean posibles, para evitar el que se pierdan los que todavía quedan, si bien se hace esto con el beneplácito de las familias y aun de los municipios, que pudieran alegar el derecho de tenerlos en el lugar de donde se encuentran.

Es, pues, conveniente que vayan al panteón nacional los restos de todos aquellos que se hayan hecho célebres en las ciencias, las letras y las armas, sirviendo esto de noble estímulo para que otros aspiren a merecer el alto honor que la patria reconocida concede a los que se distinguen por sus grandes hechos.

Leída nuevamente la proposición, y previa la pregunta del reglamento, fué tomada en consideración.

Al hacerse la pregunta de si pasaria ó no a las secciones, dijo

El Sr. FIGUERAS: Soy uno de los firmantes de la proposición, y claro está que no voy a oponer a ella; pero la misma ley fija el término de cincuenta años, que son los que han de transcurrir antes de que se pueda conceder ese honor, a fin de evitar que las pasiones tengan influencia en esos acuerdos; y yo se conceda a ninguno sin un examen imparcial y detenido. Conviene, pues, que este asunto siga todos los trámites de reglamento y se examine debidamente.

El Sr. OLOZAGA: No voy a oponerme a la proposición del Sr. Figueras; voy a decir únicamente que los cincuenta años que la ley exige impiden esa precipitación con que pudiera procederse por espíritu de partido.

Falta, pues, la razón para la detención, porque yo puedo decir al Sr. Figueras que las Cortes, al tratar de este asunto, no creyeron necesario que se procediera por los trámites de una ley, porque si lo hubieran querido así, lo hubieran dicho claramente.

El Sr. Figueras rectifica.

El señor SECRETARIO (Carratalá): ¿Pasará a las secciones la proposición?

El acuerdo de la Asamblea fué negativo.

Abierta discusión sobre la proposición, fué aprobada sin debate alguno por unanimidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): Orden del día: discusión del dictamen dando el carácter de leyes a los decretos del Gobierno provisional.

Leíóse el dictamen de la comisión, que decía así:

«Artículo único. Todos los decretos que el Gobierno provisional dictó y publicó desde su instalación hasta la de las Cortes Constituyentes como poder legislativo, en el ejercicio de la soberanía que estaba investido por la revolución de Septiembre, se tendrán y obedecerán como leyes mientras las Cortes no decreten su reforma ó derogación.

Palacio de las Cortes, 2 de Abril de 1869.—Cirilo Alvarez, presidente.—Francisco de P. Villalobos.—Vicente Rodríguez.—Ricardo Chacon.—Joaquín Buñón.—Fernando Montero de Espinosa.—Manuel de Llano y Perti, secretario.

Leíóse igualmente la siguiente enmienda:

«Los que suscriben suplican a las Cortes que sirvan admitir la siguiente enmienda al proyecto de ley convirtiendo en leyes los decretos del Gobierno provisional:

«Queda exceptuado el decreto del señor ministro de Gracia y Justicia disolviendo las conferencias de San Vicente de Paul.

El derecho de asociación no queda limitado por la residencia del jefe de las asociaciones, y no reconoce mas límites que los señalados por la Constitución. Queda por tanto derogado el decreto sobre asociaciones, publicado por el ministerio de la Gobernación.

Palacio de las Cortes 29 de Mayo de 1869.—Ramon Vinalier.—Ramon Ortiz de Zúrate.—Vicente Manterola.—Cruz O'boa.—Para autorizar la lectura, José Cristóbal Sornil.—Estanislao Figueras.—M. Ferrer y Garcés.

El Sr. SANCHEZ RUANO: Según Reglamento, me parece que en los proyectos de ley de importancia hay discusión sobre la totalidad, y en ese concepto pido la palabra en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): Como el proyecto no tiene mas que un artículo, no procede esa discusión; pero tenara V. S. la palabra luego que se discutan las enmiendas. Ahora le corresponde al Sr. Vinalier para apoyar la que se ha leído.

El Sr. VINALIER: Señores diputados, muchos actos injustos han consumado la revolución de Septiembre, pero entre todos ellos ninguno tan injusto, ó a lo menos cuya injusticia sea tan evidente, como la disolución de las conferencias de San Vicente de Paul. Desde el primer día que tuve la honra de sentarme en este banco, un sentimiento puro y desinteresado de justicia me hacia desear que llegase el momento de poder defender públicamente aquella santa institución. Se acrecenta mi deseo al oír que el señor ministro de Gracia y Justicia, cabalmente en ocasión en que me honraba contando a palabras mías, hizo graves cargos a aquella sociedad benéfica. Pero presentado por el Gobierno el proyecto de ley que se discute, creí que no debía aceptar las reiteradas invitaciones que me hizo el señor ministro para que le interpusiera sobre ese asunto, porque concebí que podía llegar un caso en que la discusión pudiera ser de un resultado más práctico. El caso ha llegado hoy. Hoy se discute el proyecto por el cual se trata de convertir en leyes los decretos del Gobierno provisional, y entre ellos está el de la disolución de las conferencias de San Vicente de Paul.

Pocas palabras, señores diputados, si soy imparcial, pocas palabras necesitare pronunciar en apoyo de esta enmienda, sobre todo después de haberse publicado vuestra Constitución. Recordad lo que en ella se dispone acerca de la libertad de asociación; recordad los argumentos que adujisteis en defensa de aquel artículo; recordad las declaraciones que hicisteis, declaraciones que salieron de todas partes de la Cámara, a saber: «que este era uno de los derechos individuales, que vosotros llamais legítimos, anteriores a toda ley, hijos de la naturaleza, y que no esta en nuestras manos alterarlos, cambiarlos ni modificarlos; y después de esto, decidme si siendo la sociedad de San Vicente de Paul una asociación que esta dentro de los límites del artículo de la Constitución, ha hecho bien el Gobierno en decretar su disolución y puede presentarse a solicitar el voto de las Cortes para una cosa que, implícitamente (no se diga explícitamente), está reprobada por la Constitución del Estado.

Lo único que puedo decir es que la sociedad de San Vicente de Paul, que las conferencias de San Vicente no tenían por objeto ningún fin ilícito ni inmoral. Y esto yo no tengo que probarlo, puesto que todos sabéis que tenía por objeto aliviar la miseria pública, socorrer las necesidades materiales de los pobres y aliviar las morales; remediar, en cuanto era posible, las dolencias de los enfermos; triste é inevitable cortejo de la condición humana.

Ciertamente, señores diputados, que no se necesitaba de vuestra Constitución para que las conferencias de San Vicente de Paul fueran una sociedad lícita y una sociedad reconocida. Desde los tiempos del paganism, en que el sentimiento de beneficencia era del todo desconocido, hasta los tiempos liberales, nunca, jamás se haba puesto restricción alguna al sentimiento de la caridad. Los reyes, en las épocas llamadas por vosotros de despotismo, habían dejado completamente libre la iniciativa individual para que excojiara la manera mejor de remediar las necesidades de los pobres: mil hospitales construídos y notados sin intervención alguna de los Gobiernos; miles de asociaciones de hombres y de mujeres, cuyo objeto principal y único era consagrar la vida en el bien de sus semejantes; hospitales, casas de beneficencia, casas de misericordia, casas de expósitos, casas de maternidad, casas de peregrinos y de refugio se habían levantado por la caridad privada, fecunda en recursos, y que animada por el sublimis espíritu del Cristianismo hacia el bien, no por miedo a las clases pobres, sino por amor hacia aquellos que aun cubiertos de andrajos y de harapos, son la imagen de Dios en la tierra; no para apartar de la vista de esa sociedad siberiática el espectáculo de la miseria que reuñga a vuestra civilización, sino por el deleite purísimo de hacer bien a aquellos que son iguales a nosotros por la sublimidad de su origen y por la grandeza de su destino.

«Ah señores diputados! ¡Con cuánto gusto haria yo la historia de la caridad cristiana, debida únicamente a la iniciativa individual! No me lo permiten las circunstancias del caso presente, ni tampoco me lo consente la costumbre que tengo de ser siempre breve cuando dirijo la palabra a las Cortes. Pero si me habreis de permitir que recuerde un hecho importante.

Las escuelas liberales científicas, (no hablo, es claro, de los progresistas), las escuelas liberales científicas han proclamado ya el principio de que el Gobierno no debe intervenir en la caridad, que atento solo a la realización del derecho solo debe intervenir en todo aquello que tienda a la administración de la justicia y a la defensa del país; que el Estado debe dejar, como cosa completamente ajena a sus atribuciones, todo lo que se refiere a la caridad; que debe dejarse completamente libre la iniciativa individual para que escogie los medios más oportunos. Pero desgraciadamente (no se diga por casualidad ó se diga con intención), cuando las escuelas liberales científicas han dicho esto han sido cuando habían despojado ya completamente a la caridad, cuando habían arrebatado todos sus bienes, cuando se había verificado la desamortización. Pero al fin y al cabo nos encontramos hoy en este caso: se encuentra la beneficencia sin recursos, se encuentra la beneficencia hasta sin derecho de adquirir: los bienes de los pobres han sido arrebatados para lo que vosotros sabéis, para nadar en la abundancia que tenemos, para la bienandanza que alcanzamos, para el desahogo en que hoy se encuentra

el Tesoro público. Pero al fin los pobres no tienen bienes: el liberalismo se los ha quitado, y naturalmente su falta se habia de suplir con la fecundidad de la caridad cristiana, que habia de inspirar los medios de ejercerla en otra forma, pues estaba privada de recursos constantes. El espíritu caritativo cristiano, falta de bienes, sin tener ese medio de comunidad que podríamos llamar comunión de unos y otros siglos, para ejercer la caridad perpetuamente ha buscado nuevos tesoros en la beneficencia domiciliaria y en varias asociaciones de caridad, entre las cuales se hallaban las conferencias de San Vicente de Paul, que nada recibían del Gobierno.

Pero el liberalismo no ha tenido bastante: el liberalismo ha querido mas, ha querido que no pudiera ejercerse ni siquiera de este modo la caridad. El por qué yo no lo sé, señores diputados; pero la verdad es que las conferencias de San Vicente de Paul han sido disueltas.

«Por qué? Yo no supongo (nada bien, estoy convencido de lo contrario), yo no supongo que habrán sido disueltas por el bárbaro gusto de ver privadas de las visitas semanales a millares de familias, víctimas de la desgracia, que además de recibir el no despreciable beneficio de un pedazo de pan, recibían el más estimable de los consuelos morales, el amor que les enseñaba la resignación. Pero, señores, si esta no ha sido la causa de la disolución de esa sociedad, ¿qué ha sido el móvil del señor ministro que la decretó? Yo creo, señores, que el único pecado que puede imputarse a él haber ejercido la caridad por amor de Dios. Yo estoy seguro de que si las conferencias de San Vicente de Paul se hubieran llamado de La Dalia, de La Camelia ó de Terpsicore, no hubieran sido disueltas; yo estoy seguro de que no hubiera caído sobre ellas el enojo ó el anatema del señor ministro, la sentencia de muerte, que tal es la disolución. Pero llevar el nombre de un santo han llamado la atención del Sr. Romero Ortiz.

Repito que tal vez sea este el único motivo y tal vez el único delito que han cometido las conferencias de San Vicente de Paul para merecer su disolución.

Digo esto con fundamento. Poco tiempo después de abiertas las Cortes, dijo una noche el señor ministro de Gracia y Justicia que acaso las conferencias no podrían decir quién tuvo la culpa de los sucesos de San Carlos de la Rápita; que acaso, si se preguntase a los individuos de aquella asociación, nos dijeran los móviles y las causas que reconocieron aquellos acontecimientos; que tal vez sabían algo también de los sucesos de Burgo, lanzando una porción de insinuaciones, que no me atrevo a calificar, pero que eran completamente injustas é infundadas; con este motivo pregunté yo al señor ministro a los pocos días, y le supliqué que se sirviera traer a las Cortes el expediente de disolución de la sociedad de San Vicente de Paul y todos los antecedentes que tuviera en su ministerio acerca de ella. El señor ministro, que siento no se halla presente en este momento, me contestó: «expediente, no le hay; antecedentes, no existen, y con lo cual, dejó demostrado que, sin expediente, que sin antecedentes, solo por su capricho y por su arbitrariedad, había disuelto las conferencias de San Vicente de Paul. Ese capricho y esa arbitrariedad ministerial se traslucian también en la falta absoluta de preámbulo del decreto. Ciertamente que de este modo no legislaban los reyes absolutos: ciertamente que los reyes absolutos no hacían lo que S. S. hizo en su famoso y fatal decreto: «sin motivo, sin razón alguna, vengo en disolver las conferencias de San Vicente de Paul.»

El señor ministro nos dijo que no había formado expediente; afortunadamente el expediente existe; el expediente debe irse a buscar en el reglamento, que prohibe terminantemente ocuparse en la cuestión política; en la conducta constante de la sociedad, que no ha merecido represión ni cargo de ningún Gobierno, ni de moderados, ni de unionistas, ni de progresistas; el expediente está en los centenares de miles de pobres que ha socorrido desde su creación; en los 60.000 pobres a quienes visitaba y socorria; en los 8.000 niños pobres y aun adultos que enseñaba en sus escuelas cuando fué disuelta. Sin crímenes hay que ir a buscarlos en las cocinas económicas, con las cuales preparaba las 2.300.000 raciones que repartía anualmente entre los pobres impotentes y entre los jornaleros que venían vagando por las calles faltos de trabajo; que deseaban, que ni nosotros, ni vosotros, ni nadie puede darles por las circunstancias de los tiempos. Sin crímenes, en fin, deb n hallarse en el número de hijos que legitimaba en el d matri-monio que se regularizaban por su intervención. Digo esto sin pretender que haga efecto en el ánimo del señor ministro de Gracia y Justicia, porque claro es que al protector y legalizador de los concubinatos, poco le ha de importar que se regularicen los matrimonios a la manera cristiana.

Creo el señor ministro de Gracia y Justicia, si lo creyera el ministro, cree el Congreso que para determinaciones tan serias basta saber confidencialmente, por conversaciones de café, lo que ligeramente se atribuye a una institución para disolverla? ¿Cree S. S. que basta saber eso, acaso por delaciones de la odiosa policía (aunque me repugna creer que el jefe la magistratura española recurra a tales medios); cree S. S. que bastaba esto de esa manera sabido para disolver las conferencias de San Vicente de Paul echando un borron sobre ellas? S. S. dijo que tal vez podría decirnos algo esa sociedad del origen de los sucesos de San Carlos de la Rápita.

Yo no puedo contestar a este tal vez; pero si este sistema de discutir valiera, no sé a dónde iríamos a parar. La ley considera que todos son inocentes hasta que no se les prueba lo contrario, y no pueden admitirse esas suposiciones, esas insinuaciones, sin prueba y sin fundamento. Si yo dijera, aplicando este modo de discurrir, siguiendo la conducta del señor ministro, que tal vez un señor ministro, tal vez un señor diputado, tal vez una comisión del Congreso han hecho esto, lo otro, ó lo de más allá, han cometido tal delito, han consumado tal crimen, ¿quedaría yo excusado ni justificado de mis calumnias por añadir un tal vez? Acaso no podría llevarme ante un tribunal, acaso no se me impondría pena; pero ciertamente inferiría una grave ofensa; os quejarías con razón de mí, reprocharías mi conducta si luego os decía que no tenía ningún medio de probar mis imputaciones. Así se injuria una asociación compuesta de 20.000 españoles, de la cual puede decirse que forman parte también los 60.000 socorridos? Parece que que disolver una sociedad compuesta de 80.000 españoles sin razón ninguna, sin motivo, sin datos ni antecedentes de ninguna especie, sin expediente, porque ya sabemos que no lo hay, es cosa demasiado arbitraria y despotica, que ni en los tiempos

de mayor despotismo aprobarían los consejeros del despotismo. ¿Cómo he de temerlos de vosotros, que os decía tan liberales, que decís que el derecho que se ha atacado es un derecho natural, inaccesible a las disposiciones de los legisladores? Esto me inspira gran confianza de que la Cámara repruebe este dictamen, ó cuando menos excoja del proyecto la parte que se refiere a la disolución de las conferencias.

Yo creo que no debo defender a la sociedad de San Vicente de Paul porque se defiende por sí misma. Algunos que no la conocen, que no han pertenecido a ella, podrán tener alguna prevención; si la tienen, se la guardaran en su interior; pero de seguro que no aprobarán la medida que el Gobierno propone mientras no se prueben los delitos que se dice que ha cometido. Por cierto que si se hubiere tratado de cometer delitos, no hubieran formado parte de esta asociación tantos hombres honrados, a quienes no ofendería el señor ministro si oyera sus nombres. Si hubiera tenido fines políticos, no habrían pertenecido a ella muchas personas que, ó no pertenecían a ningún partido político, ó pertenecían a alguno de los partidos políticos hoy triunfantes y representados en esta Cámara. En la sociedad, al mismo tiempo de acordarse su disolución por el señor ministro de Gracia y Justicia, había republicanos, había progresistas, había demócratas, había unionistas, había moderados y había carlistas. ¿Crees que compuesta de tales personas, cuyas opiniones no se preguntaban al ingresar en la sociedad, es posible que haya cometido, ni que haya pensado siquiera en la comisión de algún delito político, y ni siquiera en actos políticos ilícitos y legales?

Hay más aun: en esta misma Cámara hay quien tenía una intervención importante en las conferencias de San Vicente de Paul, quien desempeñaba un cargo de mucha significación. Pues bien, ¿crees que si hubiera habido todas esas conspiraciones que vosotros soñais, algunas de esas conspiraciones que os aterrorizan a todas horas y que parece que mirais como el anuncio de la muerte cercana que teméis a todas horas: ¿crees que si hubiera habido todo eso que decís, hubiera seguido perteneciendo a esa asociación ese amigo vuestro a que aludo? Yo siento que no esté presente, porque si estuviera, estoy seguro que llevado de un sentimiento de justicia que en él reconozco, que lleno del sentimiento de la gratitud hacia una asociación que le proporcionó las puras satisfacciones que se sienten al hacer bien, se levantaría a decir que cree inocentes a las conferencias de San Vicente de Paul de todas esas suposiciones que sirvieron de base para los ataques que les dirigió el Sr. Romero Ortiz.

Yo espero, pues, que la Cámara se sirva aprobar cuando menos esta parte de mi enmienda.

Debo moveros a ello el deseo de reparar la injusticia que con ella se cometió, ya con el decreto, ya con la manera de llevarlo a cabo.

Habéis visto que no había razón ninguna para decretar la disolución; pero el caso es que el decreto se dió y que se detriminó en él no solamente la disolución, sino también la incautación de los bienes. Realizase el decreto, y por consiguiente la incautación, lo cual, por otra parte no me causa extrañeza, porque sospecho que tal vez se reconocía esta época en los siglos venideros con el nombre de época de las incautaciones.

No quedó el Gobierno muy satisfecho del resultado de su incautación, porque habiéndose creído que se encontraría mucho dinero, solo se hallaron unos 13.000 rs. en Madrid y no exorbitantes cantidades en provincias. Y no era posible que se hallaran muchas cantidades, porque por lo mismo que la sociedad daba a los pobres 3 ó 4 millones todos los años, era imposible que tuviera fondos en sus cajas. Pero hay más: el decreto decía que se verificara la incautación de los fondos y de los libros; y como hay objetos que no son libros ni fondos, el delegado del Gobierno en Madrid accedió a lo solicitado por el presidente de la sociedad de no hacerse cargo de lo que eran libros ni fondos. No sucedió así en provincias, puesto que los delegados del Gobierno, interpretando arbitrariamente el decreto del señor ministro, se incautaron no solo de los fondos y libros, sino de todos los papeles de la sociedad, de las cocinas económicas, que habían costado miles de duros, de los bancos, mesas, sillas y demás objetos que había en las escuelas y de cuanto les gusto.

¿Y con que derecho se hizo esto? Suponiendo que exista un derecho revolucionario en los ministros, ese derecho que el otro día decía el Sr. Figueras que es derecho dictatorial necesario en las revoluciones, y que creo yo podría ser calificado de otra manera más dura y más exacta; supongo, digo, que existiera semejante derecho en el Gobierno provisional, que creara también que los alcaldes de monte-tila tenían el derecho de legislar y de incautar de más de lo que decía el decreto? Porque el decreto decía que solo se incautaran las autoridades de los fondos y de los libros; pero en algunas provincias se incautaron de otras muchas cosas más.

¿Qué me importa, señores que proclamemos muy alto el derecho de propiedad si al lado de este derecho de propiedad se levanta el derecho de incautación? ¿Qué nos importa que se proclame el derecho de publicar é imprimir libremente las ideas si al propio tiempo puede un gobernador, como ha hecho el Sr. Zaragoza, resoger en determinada ocasión la circular de un Obispo y puedan prohibir muchos gobernadores la emisión de pensamiento en el púlpito ó de otra manera, y se cree con derecho a hacer censurar la palabra divina por algún progresista albeitar ó maestro de escuela?

¿Qué nos importan esos derechos de asociación que se han proclamado, si a renglón seguido, si al día siguiente se proclaman los decretos que los quebranta debe ser aprobado? ¿Qué me importa que la Constitución no prohiba las asociaciones, ni establezca para ellas otros límites que los de la moral pública, si es permitido sin motivo, sin instruir por lo menos un expediente gubernativo disolver las conferencias de San Vicente Paul?

Esto, señores diputados, por lo que se refiere a la primera parte de mi enmienda.

Tiene otra segunda parte, que se refiere al decreto sobre libertad de asociación dictado por el señor ministro de la Gobernación.

Yo no quiero examinarlo en todas sus partes, no quiero entrar en sus detalles para ver si hay en él algún artículo que pudiera ser perjudicial a la sociedad y obstáculo al orden, pues tal como se halla redactado, es demasiado lato y peligroso. Prescindo de esto: me ocuparé solamente de un artículo de ese decreto, artículo importante, que también debe declararse derogado por la Constitución. Yo pido en mi enmienda que la asociación en España tenga los límites que la Constitución del Estado fija, mien-

Tal vez se me contestará a esto con esas... no sé qué palabra usar; soy poco fácil en la palabra y no encuentro fácilmente la necesaria para expresar mi idea: diré con esas vulgaridades progresistas (y permítame esta frase el señor ministro de

Fomento), de que conviene cerrar los seminarios porque son un foco perenne de conspiración y el depósito de las algaratas, y pistones, y pólvora, cañones, fusiles y demás pertrechos de guerra de ese ejército carlista que hace meses os quita la tranquilidad y perturba vuestro sueño.

Yo a esto diré, como lo decía el Sr. Ortiz de Zárate hace poco, que si en efecto hay culpables, se proceda contra ellos y se les castigue; pero que no se diga creemos, tal vez, este es mi criterio, este es mi juicio. Esta, señores, no es la manera de defender cosas tan graves como las que se contienen en los decretos que estamos examinando. Seguro estoy de que el señor ministro no acudiría a tales recursos, que no sería justo pensar esto de sus talentos.

Se ha dicho, sin embargo, todo esto de los seminarios, y ciertamente que si el partido carlista tuviese todos los fusiles y todas las armas que según se ha dicho en varios periódicos se han encontrado en algunos seminarios, ya podáis tener por segura vuestra derrota, porque a haber un hombre para cada fusil de esos que se dice que se han encontrado, ya se habría reunido un ejército como el de Artajayes.

Yo creo que siendo esta cuestión que tratamos una cuestión de derecho y de justicia, solo con razones de justicia y de derecho puede discutirse, y no con vulgaridades, aun dado caso que esas vulgaridades tuvieran algo de verdad. Disolúese si los bienes de los seminarios fueron bien adquiridos y forman una legítima propiedad; examinase si ese convenio en virtud del cual se les ofreció una dote en vez de los bienes que se les tomaron, ha estado bien o mal celebrado, y si hubo o no facultad para llevarlo a efecto, y si debe o no respetarse; en una palabra, pues que es cuestión de derecho, en el terreno del derecho debe tratarse, dejando a un lado todas esas vulgaridades de la guerra civil y de si los seminarios son o no centros de conspiración carlista. Véase la historia gloriosa de los seminarios; recuérdense los grandes hombres que de ellos han salido, y de esta manera, y no con acusaciones infundadas, podremos resolver acerca de la conveniencia de nuestro decreto.

La hora me aconseja ya no extenderme más, y casi debo agradecer al señor presidente su empeño de que apoyara esta tarde la enmienda, a pesar de lo avanzada que se hallaba la sesión, porque así he tenido que molestar menos tiempo la atención de la Cámara, siquiera al ser más conciso haya dejado de presentar otra porción de razones que habría podido aducir fácilmente en favor de la enmienda que he presentado y que ruego á la Asamblea tome en consideración.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): Se suspende esta discusión.

Se leyó el dictamen de la comisión de regencia, que dice lo siguiente:

«Artículo único. Las Cortes Constituyentes nombran regente del reino, con el tratamiento de Alteza, al presidente del Poder ejecutivo D. Francisco Serrano Domínguez, con todas las atribuciones que la Constitución concede á la regencia, menos la de sancionar las leyes y suspender y disolver las Cortes Constituyentes.»

Palacio de las Cortes, 10 de Junio de 1869.—Salustiano de Olózaga.—Cirilo Alvarez.—Cristóbal Martín de Herrera.—Pascual Madoz.—Victor Balaguer.—Manuel Bueno.—Gabriel Rodríguez.

Pidieron la palabra en contra los señores Garrido (D. Joaquín), Ochoa, Navarro y Rodrigo y Muñoz Bu-no.

Se leyó y quedó sobre la mesa, acordando se imprimiera y repartiera á los señores diputados, el dictamen de la comisión sobre la proposición de ley para que las Cortes nombren regente del reino á D. Francisco Serrano Domínguez.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): Sírvase V. S., señor secretario, preguntar si mañana á primera hora se reunirán las Cortes en secciones. Hecha la pregunta por el señor secretario Caratala, el acuerdo fue afirmativo.

El señor VICEPRESIDENTE (Cantero): Orden del día para mañana: Reunión de secciones, dictamen sobre la regencia, y demás asuntos pendientes.

Se levantó la sesión.
Eran las siete y medio cuarto.

PARTE EXTRANJERA.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

PARIS, 10.—Ayer, una muchedumbre estaba reunida en el boulevard Montmartre cantando la Marsellesa; los sargentos de la villa y la caballería los han dispersado, ocupando el boulevard y prohibiendo la circulación.

Escenas más graves se han producido en el boulevard de Belleville. Los perturbadores han roto los faroles, han quemado el kiosko de un vendedor de periódicos y han causado estragos en un café.

Escenas análogas han tenido lugar en la plaza de la Bastilla.

Se han hecho numerosas prisiones.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

MADRID 11 DE JUNIO DE 1869.

CLEROFobia LIBERAL.

La Iberia publicó ayer, con el título de Justicia, un furibundo artículo contra el Clero, á quien acusa del grave crimen de no haberse congratulado al promulgarse la Constitución.

Artículo de La Iberia y contra el Clero, ya pueden figurarse nuestros lectores lo que será. No faltan como es de suponer las liberales frases de *secueles del fanatismo religioso, tan ambiciosos como ignorantes, que han convertido la catedral del Espíritu Santo en tenebroso club donde se conspira abiertamente contra los derechos del hombre, que han manoseado el confesionario y el púlpito, llevando al ánimo del verdadero creyente la duda y la vacilación*, y otras por el estilo, tan groseras como faltas de sentido.

A La Iberia le ha llegado tan á lo vivo la conducta del Clero español en la impía fiesta revolucionaria del 6 de Junio, que no ha podido escribir con concierto dos párrafos seguidos.

Vaya un ejemplo. Dice el diario progresista que deplora que el Clero no haya tomado participación en la fiesta nacional; pero que si esa abstención fuera la sola causa que motiva su queja, se lamentaría en silencio del funesto error en que incurrió á cada paso los que debían contentarse con ejercer la jurisdicción de que están revestidos. «Pero hay más, añade: no solo al retraimiento han apelado, sino que se han opuesto esos ministros del Señor á que los Cabildos tomaran parte en el solemnisimo acto de la promulgación de la obra constitucional.» Es decir, yo lamentaría en silencio que Vd. no hubiera tomado parte en una fiesta que había dispuesto en mi casa; pero Vd. no se ha contentado con esa abstención, sino que además se ha opuesto Vd. á tomar parte en la fiesta.

Comprendemos el dolor de La Iberia. Lo que á este sensible periódico le ha herido en las más delicadas fibras de su corazón progresista, no es que los Curas se hayan abstenido de tomar parte en la fiesta, sino que no hayan concurrido á

ella. Una y otra cosa podrán parecer lo mismo á los entendimientos vulgares, pero un entendimiento progresista no es un entendimiento vulgar.

Mas aunque nosotros no alcancemos á comprender la diferencia, vamos á ver si podemos aminorar el pesar de La Iberia. Duélese este diario de que no se hayan repicado las campanas, y de que no se hayan celebrado funciones para conmemorar el fausto acontecimiento de la susodicha promulgación. Diganos La Iberia: ¿en qué artículo de la Constitución se dispone que el Clero mande tocar las campanas á capricho de un gobernador ó de un alcalde? ¿Hay algún artículo en el llamado código fundamental, que prevenga cuándo y cómo se ha de recoger el Clero?

Que la Constitución obligue á todos desde el momento que se ha promulgado, como dice La Iberia, no es por cierto un motivo para que todos los obligados lo estén también á demostrar su júbilo por semejante obligación. El día en que se promulgó la Constitución, cada español hizo lo que tuvo por conveniente; algunos pocos celebraron la fiesta dando vivas más ó menos espontáneos delante del tablado donde se leía; otros contemplaban con indiferencia el espectáculo, y la inmensa mayoría, usando de un derecho individual, huía de la fiesta con dolor ó con risa según el estado de su ánimo que tampoco sobre esto dispone nada la Constitución. ¿Y por qué razón ha de ser el Clero objeto de un odioso privilegio? ¿Quién tiene derecho á censurar su conducta? La razón del derecho que supone tener La Iberia, la explica en las siguientes palabras: «No acertamos á explicarnos la conducta del Gobierno que aun paga y mantiene en sus puestos á los que no respetan la legalidad consagrada, que estamos todos obligados á acatar respetuosamente.»

Hé ahí la buena fe en los diarios liberales. A sabiendas de que es completamente falso lo que dicen, han de dar siempre por supuesto que el Clero es una clase asalariada por el Estado; el cual no hace otra cosa (cuando paga) que dar una mezquina indemnización por los cuantiosos bienes de que se incautó.

Más les valiera á La Iberia y demás órganos del liberalismo dejar á un lado antifaces que todo el mundo conoce ya, y decir claramente lo que sienten. Les molesta la actitud del Clero porque esa clase expresa el sentimiento unánime de todos los españoles amantes de su religión y de su patria. Les molesta porque saben que el pueblo español piensa acerca de la presente revolución lo mismo que piensan los Prelados y piensa el Clero, á cuyos sentimientos unen los suyos desde lo íntimo de su corazón. Y ya que nuestros revolucionarios no se atreven á decir claramente que están en oposición con la nación española, descargan su ira contra el Clero.

Gritad lo que queráis, insultad al Clero, injuriad, porque por ahora podéis hacerlo á mansalva, el Clero sufrirá con paciencia vuestros insultos, y seguirá adherido á la roca inmovible de la Iglesia católica, que condena vuestra obra, no por lo que tiene de política, sino por lo que tiene de impía y de anti-católica. Podéis hacer lo que queráis; agotad el vocabulario de vuestras groserías; calumniad al Clero; excitad al Gobierno á que aumente la persecución, pero tened entendido que no obligareis por esto á la Iglesia española á que aplauda vuestra obra contra la Iglesia universal.

La Iberia amenaza á los ministros con sus protestas y censuras, si no toman alguna medida enérgica contra los Prelados y Sacerdotes que se han negado á celebrar la promulgación de la Constitución. Que la tome enhorabuena, sea de la clase que quiera; que destierre á esos Prelados y Sacerdotes, que los encarcele, que los persiga por todos los medios. ¿Cree La Iberia que con esto habrá asegurado el Gobierno su dominio? Lo que conseguiría sería acabar con la indiferencia que hay todavía en ciertas clases; conseguiría que muchos que hasta ahora se lamentaban en silencio de los males de nuestra patria, levantasen enérgicamente su voz contra la tiranía, que poco á poco nos ha de llevar á todos.

Por nuestra parte, por parte de todos los buenos católicos, lo que importa es, que desde ahora salgamos á la defensa del Clero, villanamente ultrajado; que protestemos contra todo ataque á la independencia y á la libertad de los ministros de nuestra Santa Religión, y que hagamos comprender al Gobierno que los golpes que descargue sobre el Clero, herirán á todos los buenos católicos.

Con una proposición del Sr. Reig, pidiendo que no pase de 2,000 millones el presupuesto de gastos, dió principio la sesión de ayer.

El Sr. Reig se fundaba, entre otras cosas, en que el país no puede pagar lo que el Sr. Figuerola pide, y en esto tiene mucha razón. Pero el sabio economista que está al frente del ministerio de Hacienda, manifestó que el deseo del señor Reig es una bella utopía; dos mil millones, es una miseria en tiempos liberales: la revolución necesita tres mil millones para sostenerse. Que el país se arruine, nada importa con tal que se salve la libertad en que viven de disponer de la pública riqueza.

El Sr. Figuerola no quería que se tomara en consideración la proposición del Sr. Reig; pero conociendo que la Cámara iba á desairarle, pidió que pasara á la comisión de presupuestos. Así se acordó, pero no haya cuidado que produzca efecto; que hablar de economías cuanto apetito tan grande muestran los revolucionarios, es perder el tiempo.

Después de presentar el Sr. Olózaga á las Cortes una escribanía de plata que regala la condesa de Mina, y declarar el Congreso que los restos de Gravina, el Gran Capitán y otros pignones por el estilo, son dignos de ocupar un puesto en el panteón nacional, al cual con el tiempo irán á parar las cenizas de Prim, Topete, Ruiz Zorrilla, etc., etc., empezóse á discutir la proposición que dá carácter de leyes á los decretos del Gobierno provisional.

Esta proposición es tan tiránica como absurda. Después de promulgada la Constitución, en que se establecen los derechos de reunión y asociación, y los demás imprescriptibles, querer que sean leyes los decretos que dió Romero Ortiz expulsando jesuitas, exclaustrando monjas y disolviendo las conferencias de San Vicente, es un contrasentido. Por eso el Sr. Vinader y el señor Ortiz de Zárate combatieron la proposición, defendiendo con elo uencia y energía, áquel las conferencias de San Vicente de Paul, á cuya existencia nada puede oponerse en justicia, y este las asociaciones religiosas en general.

A las contundentes razones de los diputados católicos, respondieron los Sres. Figuerola, Moret y Ruiz Zorrilla con fútiles y vanos argumentos. Que las asociaciones suprimidas eran

auxiliares de la reacción, lo cual, si no fuera una insigne falsedad, sería un pretexto injusto, porque el sistema preventivo es un absurdo en las doctrinas liberales; y que la extinción de frailes y monjas se concilia con el derecho de asociación, sancionado por la llamada ley fundamental del Estado, cosa que no comprende el sentido común, tal fué la sustancia de la contestación que dieron aquellos señores á los diputados católicos. La salsa, no habrá para qué decirlo, fué la de siempre; una serie de insultos lanzados por el sabio y erudito ministro de Fomento contra Curas, frailes y católicos.

Casi frisó ayer á la altura de la ciencia de Zorrilla el Sr. Moret y Prendergast, al contestar á nuestro amigo el Sr. Vinader. El joven democrata dijo que el Sr. Vinader no debía invocar la Constitución en apoyo de su derecho, porque no la había violado.

Es decir, que las leyes no rigen y sobre todo no se aprovechan más que para los que las hacen y aprueban. Donosa y nunca vista teoría por cierto. Su aplicación produciría admirables resultados en la administración de justicia. Hé aquí un descubrimiento que el Sr. Moret no era capaz de hacer si no estuviera contaminado su ingenio con el roce progresista.

Los partes telegráficos que hoy recibimos de París demuestran que el orden público continúa gravemente alterado en la capital del vecino imperio.

Tiempo hace que venimos anunciando en El Pensamiento la inminencia de sucesos desagradables en Francia, como resultado de la política que Napoleón ha seguido en estos últimos tiempos, y de la agitación sobrevenida en España á causa del motín de Septiembre.

Se están cumpliendo nuestros augurios. Es probable que á estas horas se haya roto el fuego entre las tropas imperiales y el pueblo de París. Y nótese, que los franceses no hacen nunca revoluciones contra el ministerio, sino contra el jefe supremo del Estado. El tiro, por lo tanto, va derecho contra Napoleón y su dinastía.

Es la primera vez que á Napoleón III se le suleva el pueblo francés, y decimos el pueblo francés, porque no en París solo, sino en la mayor parte de los departamentos se nota el mismo espíritu de hostilidad contra el emperador. Parece imposible que sean tan ciegos los monarcas constitucionales, que no vean en su propio sistema la causa de la inestabilidad de sus tronos. Cerca de un siglo llevamos en Europa de monarquías liberales y cosas verdaderamente providenciales en este espacio de tiempo ninguna de estas monarquías ha resistido el embate revolucionario.

Qué historia tan instructiva podría hacerse del liberalismo en el Continente de Europa, partiendo de la muerte de Luis XVI y concluyendo en la caída de Isabel III! Verdad es que aún será más instructiva dentro de veinte ó treinta años cuando se pueda añadir al número de las víctimas la dinastía de Napoleón, la de Víctor Manuel y la de Francisco José de Austria, heridas ya en las entrañas, sin esperanza de curación.

El emperador de los franceses podía haber fundado una dinastía invencible declarándose francamente afecto á la política cristiana. Cuando se puso de parte de los católicos se sintió fuerte y seguro; cuando los abandonó firmó involuntariamente su sentencia de muerte.

Hoy, si quisiera retroceder en el camino de sus errores, sería acaso tarde. ¿Quién podrá fiar en él y prestarle su decidido apoyo? Solo con su guardia imperial, con sus pretorianos, con sus cañones, Napoleón es débil, como todo Gobierno que carece de fuerza moral. Combatido por los republicanos y orleanistas, abandonado de los católicos y defendido únicamente de aquellos que le deben mercedes personales, ¿de qué le servirán sus cañones y sus pretorianos si la idea que él representaba ha muerto, y viene á sustituirle otra que más tarde ó más temprano ha de triunfar de todos los obstáculos materiales? Estos grandes políticos no quieren convenirse de que todas las revoluciones provienen de la inteligencia y no del fusil, y que mientras la inteligencia no esté sumisa es imposible el mantenimiento del orden y la seguridad del Gobierno.

Ignoramos si el Emperador será ó no vencido en la guerra que el pueblo parisiense acaba de declarar. Lo que si podemos asegurar es que el imperio ha muerto moralmente, y que si hoy sofoca la rebelión con la fuerza de las armas, mañana ó pasado mañana será indefectiblemente sofocado por la fuerza de las ideas.

Las consecuencias que todos estos sucesos pueden tener en la política española, fáciles son de adivinar. Si el imperio cae, Montpensier es rey de España, y el conde de París rey de Francia probablemente. También pudiera suceder que se proclamara la república á la vez en uno y otro país, inmediatamente después de la caída del imperio. Pero se nos figura que esto es algo más difícil. En lo que no cabe duda es en que tras los Orleans vendrá la república irremisiblemente.

Si á esto se añade el desprestigio de Víctor Manuel y el incansable afán con que trabajan los republicanos de Italia, bien se puede asegurar que el año de 1869 será en la historia del siglo XIX uno de los más interesantes para las generaciones futuras.

En medio de esto, hay dos grandes esperanzas para los católicos: el Concilio ecuménico que vá á celebrarse en el Vaticano, y la reacción religiosa que se está verificando en el pueblo español. ¿Quién sabe si España, unida á Roma en un mismo sentimiento, ha sido destinada por Dios para salvar á Europa y al mundo!

A consecuencia sin duda de las excitaciones del Gobierno español, el subprefecto de Bayona por orden del ministro del Interior del vecino imperio, ha dispuesto la internación de algunos españoles residentes en los pueblos fronterizos á España.

Veinte ó treinta españoles que estaban en un pueblo próximo á Bayona, recibieron el día 8 la orden de cambiar de residencia. Al día siguiente se comunicó la misma orden al general carlista Sr. Marcell, al Sr. Lirio, á un hijo de este y al señor conde de Robres con uno de sus hijos. Lo mismo á los que recibieron la orden el día 8, como á los que la recibieron el día siguiente se les ha mandado trasladarse á Bourges.

Parece que hay amenazas de internación otras muchas personas y sujetas á la vigilancia de la autoridad. A estas se les ha clasificado en isabelinos y carlistas, siendo de notar que se han cometido en la clasificación equivocaciones muy curiosas.

Semejantes medidas, como hemos indicado,

han debido ser provocadas por escitaciones del Gobierno español. De otro modo no es probable que las adoptase la autoridad francesa cuando por ellas se han de irrogar perjuicios de consideración á los pueblos de Francia, que viven en gran parte de lo que por alquileres de casas y por otros muchos conceptos gastan los españoles que van á pasar en ellos los meses de calor. Y es claro que algunas familias se retraerán de ir á la costa de Francia inmediato al Pirineo, si la experiencia demuestra que ni aun allí se puede vivir á cubierto del celo democrático de nuestros gobernantes ó de su representante en Bayona.

Por lo que respecta al Gobierno francés, es sensible que por ser deferente para con el Poder ejecutivo se exponga á cometer deplorables injusticias; porque es lo cierto que las personas internadas, ó la mayor parte de ellas, tengan las ideas que quieran, con nadie se meten ni hacen otra cosa que vivir tranquilamente renunciando al ejercicio de los derechos individuales con que les concede la flamante Constitución de nuestros liberales. Y aun cuando así no sea, supuesto que los españoles residentes en la frontera dieran algún motivo de temor al Gobierno de su patria, parecemos que la autoridad francesa podría á lo más obligarlos á internarse, pero no á ir á punto determinado.

Por todas estas consideraciones, y singularmente porque el Gobierno francés se convencerá de que las excitaciones del español no tienen motivo alguno racional, es de esperar que las medidas de que hemos dado cuenta no tardarán en ser reformadas.

También se nos dice en la carta á que nos referimos, que el Sr. Gonzalez Brabo había sido llamado por el subprefecto de Bayona, y se creía que recibiría la orden de internarse.

El Sr. Vinader pronunció ayer tarde en el Congreso un excelente discurso defendiendo una enmienda encaminada á exceptuar de la aprobación de las Cortes el decreto del Sr. Romero Ortiz disolviendo la sociedad de San Vicente de Paul.

El Sr. Vinader hizo una magnífica defensa de esta sociedad, probando que el Gobierno había obrado arbitrariamente al suprimirla. Los señores de la comisión y el ministro de Hacienda, al contestar al Sr. Vinader, vinieron á darle la razón involuntariamente; porque fueron tantos y tales los desatinos que dijeron, y con tan singular frescura, que era cosa de dudar si aquellos benditos señores se habían vuelto locos, ó obedecían á una inconcebible mala fe.

Pedia el Sr. Vinader pruebas de que la sociedad de San Vicente tenía un objeto político, y se levantaba al Sr. Figuerola—uno de los hombres más ineptos de la presente situación—á decir que el Gobierno estaba íntimamente convencido de que aquella sociedad era subversiva, y por lo tanto ilícita. Volvía el Sr. Vinader á pedir pruebas, y volvía el Sr. Figuerola á no dadas y á repetir, sin embargo, las anteriores acusaciones....

¿Qué pena señala el Código á los calumniadores?

El Sr. Moret, antiguo socio de las conferencias de San Vicente, y hoy furioso democrata, confesó á instancia del Sr. Vinader que nada había visto en aquellas contrariedades á la moral y al orden público.... ¿Green Vds. que el Sr. Figuerola se dio por vencido? ¡Bah! Hace tiempo que sabemos que el Sr. Figuerola está reunido con el sentido común.

Damos al Sr. Vinader la enhorabuena por su discurso, y el pésame por verse precisado á discutir con cierta clase de personas.

Nos figurábamos lo que El Imparcial había de contestar á nuestro aserto de que el Clero está perfectamente en su derecho al negarse á dar gracias por la promulgación del Código fundamental.

«El Clero, dice aquel periódico, depende inmediatamente del Estado, y por lo tanto está en el deber de acatar sus disposiciones y obedecer sus mandatos.»

Esto es indigno de El Imparcial, que no ignora el carácter independiente de la Iglesia, aun cuando reciba la protección del Estado. ¿En qué depende el Clero del Gobierno? En lo mismo que dependemos todos los españoles, como ciudadanos sujetos á una legalidad común. No nos arguya El Imparcial diciendo que el Clero recibe sueldo del Estado, porque harto sabe aquel periódico que este sueldo no es más que una indemnización por los bienes que el Clero posea y el Estado se apropió.

Queda, por lo tanto, en pie nuestro argumento. Si los republicanos usaron de un derecho indisputable negándose á tomar parte en la promulgación del susodicho Código, el Clero usó también de su derecho al hacer lo mismo; porque el Clero, no siendo empleado, como no lo es, tiene idénticos derechos y deberes, por lo menos, como todos los demás ciudadanos españoles respecto del Estado.

Confiese El Imparcial que ha sido injusto al llamar faccioso al Clero, y habrá dado una muestra de verdadera imparcialidad.

Los republicanos de Andalucía y Extremadura han constituido un centro común de acción que lleva el nombre de Asamblea andaluza y extremeña, y que es semejante al pacto federal de Tortosa, de que ya tienen noticia nuestros lectores.

Los republicanos andaluces y extremeños, siguiendo el ejemplo de los de Aragón, Cataluña y Valencia, trabajan por organizar completamente al partido republicano. Dentro de poco habrán logrado su objeto en toda España, y su escasa importancia será ventajosamente compensada por la organización y disciplina del partido.

No quieren que este haga esfuerzos aislados, y por consiguiente, estériles, como los de Cádiz y Málaga. Cuando merced á la organización, á la propaganda, á los clubs y á las manifestaciones puedan los republicanos dar impulso unánime á sus fuerzas, validos de la debilidad de la presente situación revolucionaria, Dios sabe á donde iremos á parar.

Un Gobierno católico, fuerte y popular, es lo único que puede salvar á España; mucho más en las críticas circunstancias por que atraviesa Europa.

Decía ayer el Sr. Figuerola: «Sepase que respetando como debemos la Constitución que hemos firmado, no dejaremos que exista la sociedad de San Vicente de Paul.» Si las Cortes fueran verdaderamente soberanas y lógicas con sus principios, hubieran exigido al Sr. Figuerola y al Gobierno en masa si

aceptaba las frases del ministro de Hacienda, la responsabilidad debida por haber atacado la Constitución en la parte referente á los derechos individuales.

«Cuando darán las Cortes una verdadera muestra de soberanía juzgando á los ministros y al Gobierno y castigando con la pena que merezcan?»

La Regeneración desmiente anoche las voces que han esparcido los liberales de que el general Cabrera, conde de Morella, es partidario de la libertad de cultos en España.

Nuestras noticias sobre el particular son las mismas que las de La Regeneración.

Gracias á Dios que El Universal llama una vez las cosas por su nombre. Según este periódico, no pagar al Clero sus haberes, suprimir conventos de monjas, establecer el registro y matrimonio civil, son desmanes de la revolución ó de la autoridad.

Quien crea que no somos exactos, lea las líneas siguientes del diario progresista, en que su corresponsal de Avila se revuelve furioso contra el Obispo y Clero de aquella ciudad, que se negaron á mandar tocar las campanas con motivo de la promulgación de la Constitución.

Dice así El Universal:

«Será, acaso, que aquí hayan cometido la revolución primero y las autoridades después desmanes contra el Clero? Nada más contrario. Es la provincia donde menos se le debe de sus haberes; no se ha suprimido ningún convento de monjas; no se ha establecido el registro y matrimonio civil, y en los críticos momentos de la revolución nada tuvieron que sentir ni el Obispo ni el cabildo.»

Parece, según El Siglo, que ayer recibió el Gobierno importantes telegramas cifrados de la isla de Cuba, anunciándole de que el sereno Malcampo no tiene las simpatías de los voluntarios, y que se trataba de hacer con él lo que con su amigo el marqués de Castelflorite.

El Poder ejecutivo, vista la negativa del ayuntamiento de Valencia á enviar para su colocación en el panteón nacional, los restos del eminente pintor Juan de Juanes, ha desistido de su pretensión.

Leemos en El Imparcial:

«Ayer según telegramas recibidos de todas las provincias de España reinaba en todas ellas tranquilidad.»

Esto, no obstante, anoche se creía con más fundamento que nunca que los carlistas se echaban próximamente al campo, y según nuestras noticias Navarra será el teatro de su intención.»

«Cuartos particulares de Astorga aseguran que los muchos carlistas que allí existen están muy envalentonados y se agitan mucho en estos últimos días.»

Escriben de Francia que el Sr. Orovio, último ministro de Fomento de doña Isabel II, llegó el 9 á Biarritz, procedente de París, y sin dejarse ver se fué inmediatamente á la casa de campo que ocupa el conde de Cheste. Hacíanse diversos comentarios sobre este misterioso viaje.

La Verdad de Valencia copia el siguiente telegrama que aquel gobernador dirigió al ministerio el día de la promulgación:

V. LENCIA, 6.—Promulgada la Constitución con gran solemnidad y completo orden. Tengo el honor de felicitar al Poder ejecutivo por tan fausto y grandioso acontecimiento.

Y añade el periódico valenciano:

«Completo orden! Es claro, si no había gente, ¿quién lo había de alterar?»

Esto, poco más ó menos, ha sucedido en toda España.

ULTIMA HORA.

CORTES.

Abierta la sesión cerca de las tres, y después de varias preguntas de escaso interés, el Sr. Tustan pidió al Gobierno noticias de los sucesos de París, diciendo que si habría inconveniente en leer los despachos oficiales.

Contestó el Sr. Sagasta que el Gobierno no tiene inconveniente en leerlos; que según ellos, en París no hay lucha, ni barricadas, sino una mera agitación, que hoy no tiene graves proporciones.

Entrándose en la orden del día, se leyeron varias enmiendas al proyecto de regencia, apoyando una el Sr. Soler, pidiendo que ejerza el poder supremo un Consejo de cinco individuos nombrados por las Cortes.

Empezó el Sr. Soler diciendo, que aquí solo la república es posible, fué varias veces interrumpido por el presidente, que le llamaba á la cuestión. A la hora en que abandonamos la tribuna, el señor Soler hablaba de los peligros que puede tener la causa de la libertad si se da el poder á una sola persona, que no puede, por otra parte, inspirar confianza, como le sucede al general Serrano.

TELEGRAMAS.

(De la Agencia Fabra).

PARIS, 10 (á las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde recibido con retraso).—Los periódicos de todos los colores suplican á los ciudadanos que no den color ó pretexto al gobierno para una represión sangrienta. Siguen las prisiones.

Los Sres. Quétin y Cournet, redactores del periódico Revelli, han sido presos y acusados de haber formado parte de una conspiración contra el emperador.

Créese que con motivo de las últimas elecciones habrá un gran movimiento en los prefectos de los departamentos.

En la Bolsa de hoy se han cotizado:
3 por 100 interior español, á 25.
3 por 100 exterior español, á 25 3/4.
3 por 100 francés, á 70.
4 1/2 id., á 105-75.

LONDRES 10.—Lord Otway, contestando á nuevas interpeleciones sobre la cuestión del «Tornado», dice que la contestación dada por el gobierno español, será presentada al examen del Parlamento.

PARIS, 10 (á las diez de la noche).—La muchedumbre sobre los boulevares es mucho mayor que las noches anteriores. La tropa no ha roto el fuego todavía. Hay un inmenso número de curiosos y de gente del pueblo (1).

PARIS, 11 (á las cinco de la mañana).—A pesar de un bando publicado por el prefecto de policía, los grupos no se han dispersado en toda la noche, profiriendo sin cesar gritos subversivos, cantando la Marsellesa, rompiendo faroles, etc. Se han hecho otras muchísimas prisiones.

(1) Este parte ha llegado incompleto, sin duda porque el gobierno francés no ha tenido por oportuno dejar pasar las noticias comunicadas por el corresponsal.

